ELESO hace meses se viene haciendo hincapié en casi todos los medios de comunicación que tiene el elemento político en las negociaciones presentes y futuras entre la CEE y el Gobierno español. Tanto en los medios próximos a la Administración, como en los de la oposición, por un lado, como en los de los Gobiernos de los países que integran el Mercado Común, por el otro, se subraya reiteradamente la trascendencia que tiene la democratización de la sociedad española en las actuales y futuras negociaciones comerciales, tanto si se trata de las estrictamente comerciales como de las más importantes de integración de España a la CEE, a título de miembro de pleno derecho. Los Gobiernos europeos se nos presentan, en este contexto, como los primeros defensores de las libertades en España, como si su único interés a perseguir en este caso fuera desinteresadamente político, en una palabra, como si el económico estuviera ausente.

Aunque pueda resultar algo retórico, no hay que olvidar que, al menos hasta cierto punto, los diferentes Gobiernos de la CEE son los encargados de respaldar y velar por los intereses del capital de sus respectivos Estados. Y por ello es por lo que la situación induce a pensar que, como veremos a continuación, no es sólo la democratización de la vida española, sino los Gobiernos europeos, en lo que respecta a sus negociaciones con la Administración española, sino también, aunque quizá no de modo determinante, el objetivo, menos "altruista", de dar salida a los productos originados por sus respectivas economías.

Por otro lado, en lo que concierne tanto al Gobierno de capital como del otro, está detrás de la aparente falta de apremio por llegar a un acuerdo, siquiera estrictamente comercial con la CEE —y en caso extremo de la renovación del Acuerdo de 1960— se está condenando, en el deseo de seguir disfrutando de una situación económica de privilegio y, con las reducciones arancelarias y sobre todo con la entrada de pleno derecho de España en la Comunidad, se verían gravemente amenazados. Bien entendido, esta última afirmación no tiene una validez general; algunos sectores económicos se verían más perjudicados que otros; así, por ejemplo, la Banca, la siderurgia y el capitalismo y los gobiernos se oponen tanto a las reducciones arancelarias como a la adhesión, mientras que el capitalismo catalán y en general las industrias avanzadas tecnológicamente están a favor de ambas medidas.

Pues bien, esa falta de apremio que nos señala la falta de un acuerdo o de acuerdos trascendentales en el terreno económico por ambas partes tiene su fundamento en las causas siguientes: en primer lugar, y por parte española, una importante disminución de los aranceles españoles a los productos de la CEE obligaría a gran parte de la industria española principalmente —y, en sentido más restringido, a la sombra de los elevados aranceles del país agrícola en algunos, pero no en todos, de los bloques— a poder competir con los productos de la CEE. Sin duda, la industria española tendría que dejar de vivir a la sombra de los elevados aranceles que durante tantos años le han permitido, entre otras razones de orden interno, embolsarse jugosos beneficios. Podría alegarse que el proceso de reducción arancelaria ha tenido lugar, con las reducciones especificadas en el Acuerdo de 1970 entre España y la CEE. Pero bastaría un somero análisis de dicho acuerdo para percibir que solamente es una pequeña parte de las importaciones y exportaciones procedentes de la CEE. La que se ha visto sujeta a reducciones mínimamente importantes. Esa pequeña parte es la definida por la Lista A en el Tratado actual, y en los últimos años representaba únicamente el 10 por ciento de las importaciones españolas. O sea que, la casi totalidad de dichas importaciones sólo se ven favorecidas hasta ahora de una desgravación del 20 por 100. Por lo demás, la mayoría de los productos comprendidos en la lista A no son producidos por la industria española, con lo que ello no representa problema alguno para esta última.

En segundo lugar, y en lo que respecta a la CEE, lo primero que hay que señalar es que, de ser posible de aplicar el nuevo Acuerdo de 1970, de la CEE, en lo que respecta a España, es que hay una reducción de los aranceles que ha sido inferior, a juzgar por las cifras de comercio exterior, a que para esta si tiene la CEE, así como para este país que tiene España es menor, en general, que para el mercado continental. Se podría alegar que tal proceso de reducción arancelaria ya ha tenido lugar, con las reducciones especificadas en el Acuerdo de 1970 entre España y la CEE. Pero bastaría con un análisis de dicho acuerdo para percibir que se trata de una pequeña parte de las importaciones y exportaciones procedentes de la CEE. La que se ha visto sujeto a reducciones mínimamente importantes. Esa pequeña parte es la definida por la Lista A en el Tratado actual, y en los últimos años representaba únicamente el 10 por ciento de las importaciones españolas. O sea que, la casi totalidad de dichas importaciones sólo se ven favorecidas hasta ahora de una desgravación del 20 por 100. Por lo demás, la mayoría de los productos comprendidos en la lista A no son producidos por la industria española, con lo que ello no representa problema alguno para esta última.